



# Análisis de coyuntura

## AMÉRICA LATINA Y CARIBE *JULIO-SETIEMBRE 2010*

- *Mediante el presente documento hacemos entrega del VIII Informe de Coyuntura Latinoamericana encargado por la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina (CPAL) al Centro Gumilla.*
- *El anexo que acompaña el presente informe fue redactado por: Luis Arriaga Valenzuela, s.j. Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.*
- *El período de análisis comprende los meses de julio-setiembre 2010.*

**Coordinador interinstitucional** Francisco José Virtuoso, s.j.  
**Coordinador de investigación** Jesús Machado  
**Investigadores** Mateo Martínez Abarca; Luis Carlos Díaz;  
Cesar Sanson y Jesús Machado.  
**Corrección de estilo:** Marlene Bisbal.  
**Diseño:** Verónica Alonso.

*Las fotografías usadas en este documento académico y sin fines de lucro, son usadas bajo licencia Creative Commons (CC).*

CARACAS, 29 DE OCTUBRE DE 2010

### Índice

1. RUIDO DE SABLES. EL PROCESO DE REFORMAS EN EL ECUADOR, LA CRISIS POLÍTICA Y LA VIOLENCIA. ELEMENTOS PARA UNA INTERPRETACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE.	2
2. EL SUJETO INDÍGENA EN EL ESTADO MODERNO	7
3. ELECCIONES BRASILEÑAS: ¿CONTINUIDAD DEL LULISMO?	11

## **1. *Ruido de sables.* El proceso de reformas en el Ecuador, la crisis política y la violencia. Elementos para una interpretación de los acontecimientos del 30 de septiembre.**

### **Introducción**

Durante los últimos treinta años posteriores al restablecimiento de la democracia en 1979, el Ecuador ha transitado por complejos procesos que siguen delineando las pautas sobre las que se inscriben las dinámicas políticas y sociales actuales. Durante este periodo, las nefastas consecuencias producidas por los programas de ajuste estructural inspirados por el Consenso de Washington, fueron detonantes de una constante inestabilidad política y social. Los grupos de poder económico tradicionales y las élites políticas que los representaban a través de los partidos, fueron incapaces de procesar las innumerables tensiones y conflictos que el proyecto de acumulación neoliberal generaba.

Ello se tradujo no solamente en sucesivas crisis y un consecuente deterioro de la legitimidad de las instituciones, sino también en el fortalecimiento de diversas formas de movilización social y en la emergencia de nuevos actores políticos, como la Conaie y el movimiento indígena. La acción de la movilización popular, encabezada y nutrida sobre todo por los indígenas, logró bloquear, en gran medida, el avance de estas políticas en Ecuador trasladando a su vez el centro de la disputa a la naturaleza del modelo de Estado y democracia vigentes, cuestionando las raíces mismas de los acuerdos sociales excluyentes que servían como su fundamento.

Estos son, a breves rasgos, los antecedentes inmediatos del actual ciclo político que vive el Ecuador. En el 2006, una gran mayoría de ecuatorianos optó por un proyecto de transformaciones radicales denominado La Revolución Ciudadana. Liderada por Rafael Correa, economista sin mayor trayectoria política, quien se define a sí mismo como un humanista cristiano de izquierda, la Revolución Ciudadana incorporó en su programa un gran número de demandas y reivindicaciones del periodo de resistencia al modelo neoliberal, expresadas de manera sintética en la necesidad urgente de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que reformara el Estado y consignara las bases de un nuevo modelo de desarrollo.



Durante el primer periodo del proyecto, la Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en el espacio central de la disputa política, donde aparecieron los primeros indicios sobre el alcance que tendrían las reformas. Estas limitaciones mostraron varias contradicciones dentro del movimiento de gobierno –Alianza País–, el cual estaba compuesto por sectores vinculados a los movimientos sociales que pedían transformaciones radicales e inmediatas (indígenas, ecologistas, mujeres, entre otros); y, por otra parte, por sectores más conservadores con visiones cercanas a las elites económicas. En medio de estas tensiones orgánicas, el Ejecutivo apostó por las posturas más conservadoras, intervino abiertamente sobre el trabajo de la Asamblea y provocó el resquebrajamiento político del bloque y la salida de importantes integrantes cercanos a los movimientos sociales y a la izquierda.

Con el tiempo, el gobierno fue distanciándose de los sectores sociales organizados, al considerar que la fortaleza política y social de su proyecto de gobierno descansaba sobre todo en la legitimidad y el apoyo del sujeto *ciudadano* alcanzados a través de las urnas, y en el liderazgo de la figura del presidente. A pesar de estas dificultades, la Asamblea promulgó una nueva Constitución de la República que incluyó notorios avances con respecto a la anterior en materia de reformas y derechos, determinando

además una agenda de transición para el proceso legislativo de elaboración de leyes y normativas secundarias.

La nueva Constitución —expresión clara de aquel momento en la correlación de fuerzas en el país—, fue aprobada en el año 2008 con 63% de los votos, inaugurando así un segundo periodo dentro del proyecto del gobierno. En adelante, los principales retos políticos para el oficialismo fueron poner en marcha los cambios constitucionales —no sin hacer sus propias interpretaciones del texto constitucional, a veces inclusive contraviniéndolo—, y generar condiciones suficientes en términos de gobernabilidad, imprescindibles para maniobrar en un contexto de conflictividad y resistencias implicadas en dicho proceso. Con el tiempo, el enorme apoyo en votos con el que contaba el gobierno se volvería insuficiente en escenarios diferentes a los de la arena electoral, evidenciándose la principal vulnerabilidad política del régimen: la carencia de una base social organizada de respaldo y una política clara de alianzas.

## El escenario previo a los acontecimientos del 30 de septiembre

Desde que entró en funciones, el gobierno de la Revolución Ciudadana utilizó el recurso electoral no solamente como un camino para la consecución de transformaciones a través de vías democráticas, sino también como un mecanismo de renovación plebiscitaria de su legitimidad política<sup>1</sup>. Esta estrategia cercana a la mercadotecnia<sup>2</sup>, encadenó al gobierno —sobre todo a su figura principal, el Presidente—, a una administración en estado de campaña permanente bastante eficaz a corto y mediano plazo, pero insostenible en el largo.

Es así que luego de la realización de los comicios generales previstos en la nueva Constitución<sup>3</sup>, al gobierno se le terminaron los escenarios electorales teniendo que enfrentar el substrato puro y duro de la gobernanza. Lo que no sufrió modificaciones fue el estilo de conducción política del presidente Correa —antes

firme y determinado, pero luego inflexible, autoritario—, acentuándose así el proceso de concentración de casi todas las decisiones en torno a su persona y a su círculo más cercano, evidenciado desde el periodo de trabajo de la Asamblea Constituyente.

De hecho, durante el 2010, es posible observar que las lógicas

### **El distanciamiento con los sectores populares organizados de la izquierda, que en un inicio habían apoyado al régimen, empezó a convertirse en enfrentamiento directo.**

verticales de gestión del poder han conducido a una severa erosión de la relación actual entre el Ejecutivo y la actual función legislativa, en donde el oficialismo tenía casi la mayoría absoluta. El deterioro se acentuó peligrosamente al menos desde dos momentos claves: el posible juicio político al Fiscal General de

la Nación y el trámite fallido de la Ley de Recursos Hídricos; en los que el manejo político del Ejecutivo terminó restringiendo la independencia de la función legislativa, reduciendo así su capacidad para generar acuerdos.

En el primer caso, varios integrantes del bloque de gobierno buscaron entablar un proceso contra el fiscal bajo la justificación de que había incurrido en actos de corrupción y abuso de poder. Esto aconteció luego de que un auto oficial de la institución, posiblemente conducido por la esposa del fiscal, atropellara a una ciudadana colombiana causándole la muerte. En el segundo caso, la Asamblea Nacional se vio obligada a suspender el trámite de la Ley de aguas luego de fuertes movilizaciones prolongadas de las tres mayores organizaciones indígenas del país.<sup>4</sup>

El distanciamiento con los sectores populares organizados de la izquierda, que en un inicio habían apoyado al régimen, empezó a convertirse en enfrentamiento directo. Las organizaciones comprendieron que, si bien habían logrado enormes triunfos con la aprobación de la nueva Constitución, la disputa ahora se centraría en torno al problema de la aplicación y cumplimiento de la misma, así como sobre la discusión de los contenidos en la formulación de leyes secundarias.<sup>5</sup> Así mismo, otros sectores fueron entrando en disputa con la Asamblea a medida que se discutían otros proyectos de ley.<sup>6</sup>

Al mismo tiempo, fue patente la visible disminución de los frentes de conflicto con grupos empresariales, financieros y

<sup>1</sup> Desde el 2007 se realizaron al menos cuatro procesos electorales: referéndum de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, comicios para elección de asambleístas, referéndum sobre el nuevo texto constitucional y comicios generales para elección de autoridades.

<sup>2</sup> El gobierno construyó, desde sus inicios, un espectacular aparato mediático, compuesto por medios denominados como públicos —el término correcto sería estatales—; la mayoría incautados a grupos económicos que mantenían deudas con el Estado desde el salvataje bancario del año 2000.

<sup>3</sup> Realizados en el 2009 y en los que Correa obtuvo la victoria en primera vuelta y se consolidó un bloque legislativo cercano a la mayoría absoluta de 63 escaños.

<sup>4</sup> Inclusive, una de ellas ha mantenido el respaldo al régimen: la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras (Fenocin). Que las organizaciones que el gobierno considera como aliadas marchen en su contra, muestra el grado de intolerancia política del régimen.

<sup>5</sup> Como por ejemplo los temas de la Plurinacionalidad o el Buen Vivir (Sumak Kawsay), estipulados en la Constitución pero aún poco definidos.

<sup>6</sup> Tal es el caso de las universidades y estudiantes en torno a la Ley de Educación Superior o los trabajadores del sector público en torno a una nueva normativa para el sector.

algunos de sus representantes políticos<sup>7</sup>, posiblemente a razón de varias medidas proteccionistas y de incentivos tomadas por el gobierno en el contexto de la crisis mundial de la economía capitalista, y a los lineamientos de un Plan Nacional del (Buen Vivir) cuyos ejes centrales anuncian la consolidación de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). De hecho, la naturaleza de los conflictos con estos sectores ha sido cada vez más coyuntural y menos estructural con el pasar del tiempo, lo cual constituye evidencia para la hipótesis sobre la existencia de un acuerdo, tácito o no, en un momento de fragmentación y carencia de liderazgo dentro de los estamentos dominantes.

Durante los últimos años de vida democrática, la Policía Nacional y, sobre todo, las FF.AA. ecuatorianas se han convertido en actores políticos fundamentales en momentos de crisis. De una manera u otra, han pasado de la obediencia constitucional al poder civil a la deliberancia y, más aún, al arbitraje entre las fuerzas antagónicas en conflicto. Su participación directa o indirecta fue decisiva en el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad e inclusive en el del ex coronel del ejército, Lucio Gutiérrez. Tiempo después de la asonada indígena-militar del 21 de enero del 2000, Gutiérrez —junto a otros militares y policías en servicio pasivo—, estructuraron el Partido Sociedad Patriótica (PSP) que es identificado como el brazo político de la fuerza pública y que mantiene estrechas relaciones con el personal activo dentro de sus diversas ramas. El PSP fue convirtiéndose, con el tiempo, en una organización política populista que representa los intereses de grupos marginalizados o emergentes de la derecha más reaccionaria.

Probablemente por esta razón, el gobierno de Rafael Correa ha realizado importantes inversiones para el fortalecimiento de las diversas ramas de las FF.AA. y la Policía, promoviendo el mejoramiento de su infraestructura y condiciones salariales, e impulsando además el voto para los uniformados en la nueva Constitución. Algunos analistas locales han considerado que, más allá de la justificación de estas medidas, existió también un trasfondo político claro: asegurar la lealtad de la fuerza pública al gobierno. Lealtad que, como se verá más adelante, sería puramente condicional.



### El 30 de septiembre

Durante la última semana de septiembre la situación política en el Ecuador tendía a complicarse. La Asamblea se aprestaba a concluir el trámite de dos leyes que habían recibido vetos del Ejecutivo: la Ley de Educación Superior y la Ley de Servicio Público. La tarde del 28 de septiembre, la Asamblea no reunió el quórum necesario para allanarse o ratificarse frente al veto —varios asambleístas del gobierno se ausentaron—, razón por la cual la sesión fue suspendida. Agotándose el tiempo estipulado para su tratamiento, en pocos días entró en vigencia la nueva normativa por el Ministerio de la Ley sin que se hayan tratado los conflictivos vetos del Ejecutivo.

Las universidades públicas y privadas y el estudiantado se habían mantenido en movilización permanente durante los últimos meses y anunciaron protestas. De manera similar, los trabajadores públicos —quizá uno de los sectores más golpeados por el gobierno—, preparaban movilizaciones y paralizaciones a razón de que el tiempo se agotaba para el trámite de la ley que regula su sector. En este sentido, es evidente que la Asamblea se encontraba bajo fuerte presión de un Ejecutivo que, mediante su derecho al veto hacía y deshacía los acuerdos legislativos o sociales previos; y arrinconada por las protestas.

El jueves 28 la Asamblea aprobó, no sin severas fisuras internas dentro del bloque oficialista, la nueva Ley de Servicio Público. Ante la presión del Ejecutivo, no fueron tomadas en cuenta varias excepciones planteadas durante la discusión legislativa, particularmente en torno al tema de bonificaciones y condecoraciones dentro de las instituciones de la fuerza pública. El gobierno tomó las divisiones internas como expresión de *deslealtad o falta de compromiso* de los asambleístas de Alianza País con el proyecto de la Revolución Ciudadana, anunciándose por la noche la casi probable apelación al recurso extremo de la “muerte cruzada”.<sup>8</sup>

**Las universidades públicas y privadas y el estudiantado se habían mantenido en movilización permanente durante los últimos meses y anunciaron protestas.**

<sup>7</sup> Es notoria la disminución del conflicto con una de las principales cabezas de la oposición: Jaime Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, el gobierno tiene fuerte oposición de la segunda fuerza política del país, el Partido Sociedad Patriótica.

<sup>8</sup> La “muerte cruzada” es un mecanismo previsto en la nueva Constitución amparado en varias justificaciones, que permite al presidente la disolución de la Asamblea Nacional por una ocasión durante su periodo de funciones, convocándose en un plazo determinado a nuevas elecciones generales.

La mañana del 30, el país despertó con una huelga a nivel nacional de la Policía, a la que se sumaron algunos sectores de las FF.AA. Las protestas de los policías se concentraron en los grandes regimientos así como en sectores estratégicos de varias urbes. En Quito, los policías organizaron una inusual marcha hacia la Asamblea mientras que el grueso principal de protesta se concentró en su cuartel principal, el Regimiento Quito No. 1. En Guayaquil, los policías bloquearon el estratégico puente de la Unidad Nacional que conecta a la urbe con el resto del país, produciéndose, mientras tanto, los primeros saqueos dada la falta de resguardo.

Antes de las 10 de la mañana, el presidente Rafael Correa arribó al Regimiento Quito para dirigirse a la tropa insubordinada. Tras ser agredido en primera instancia, y teniendo que retirarse, el presidente logra ingresar al regimiento para dirigir un discurso desde una de las ventanas superiores de uno de sus edificios. De manera indiscutiblemente irresponsable, el presidente, además de exponer su integridad personal y su investidura en una situación sumamente grave, opta por una retórica poco conciliadora y un lenguaje corporal violento que exacerbaban aún más los ánimos.<sup>9</sup> Cuando el presidente abandonaba el recinto policial, fue agredido por la tropa, teniendo que ser evacuado a las instalaciones adyacentes donde funciona el Hospital de la Policía.

Para ese entonces, sectores de la Fuerza Área tomaban la pista del aeropuerto principal de Quito y elementos del Ejército bloqueaban las vías contiguas al Ministerio de Defensa. Hacia el medio día, y luego de ser atendido por médicos en el Hospital de la Policía, el presidente logra establecer contacto telefónico con la Televisión Pública, denunciando, en vivo, la gestación de un golpe de Estado instigado por Lucio Gutiérrez. Al mismo tiempo, varios integrantes de partidos de izquierda como de derecha pronuncian su apoyo —en mayor o menor medida— a la insubordinación. En varias ciudades del país se organizan concentraciones de respaldo al presidente y a la democracia, siendo la más importante la organizada por el gobierno y Alianza País en Quito.

Alrededor de las 13h00, el canciller Ricardo Patiño llama a la población a movilizarse hacia el Hospital de la Policía, denunciando que el presidente se encuentra secuestrado y que



**Rafael Correa es rescatado del Hospital de la Policía y pocos minutos después dirige un discurso ante una concentración apostada frente al Palacio Presidencial, que también fue transmitida en vivo.**

corre peligro su vida. Funcionarios públicos, autoridades de gobierno, miembros del gabinete y ciudadanos son reprimidos brutalmente por la policía mientras tratan de llegar al lugar de los hechos. La movilización de apoyo no cuenta, sin embargo, con un número mayor a las mil o mil quinientas personas.

Hacia las 14h00 se decreta el estado de excepción y, por disposición gubernamental, los medios de comunicación a nivel nacional se enlazan en cadena con los medios públicos. Poco tiempo después, el Comando Conjunto de las FF.AA. emite un pronunciamiento en el que si bien declara su respeto al orden constitucional y solicita a la Policía deponer la protesta, llama al gobierno a revisar los elementos de conflicto de la Ley de Servicio Público. A

medida que los militares asumen el control de la situación en las ciudades, la protesta policial comienza a diluirse a nivel nacional. En Guayaquil los policías desisten de la medida dejando solos a los insubordinados del Regimiento Quito.

Durante la tarde se conoce que un acuerdo para la salida del presidente estaría definido, sin embargo aquello no acontece. Entre las 20h00 y 21h00 los medios nacionales vuelven a salir al aire en horario estelar justamente en el momento preciso en que se desarrolla un operativo de rescate al presidente, conducido por fuerzas especiales del Ejército y grupos de élite de la Policía que no se habían plegado a la protesta. El espectacular operativo es visto en vivo y en directo a nivel mundial. Rafael Correa es rescatado del Hospital de la Policía y pocos minutos después dirige un discurso ante una concentración apostada frente al Palacio Presidencial, que también fue transmitida en vivo.

## Después de la tormenta

En primer lugar es necesario reconocer que existía fuerte descontento en varios sectores nacionales durante los días previos a la insubordinación de la Policía. Si bien la protesta policial inició como un reclamo salarial, fue adquiriendo otras connotaciones con el pasar de las horas, generándose, por momentos, condiciones reales para un golpe de Estado o la muerte del presidente. Cabe especular que si la dinámica de los aconteci-

<sup>9</sup> En al menos dos ocasiones el presidente se abrió la camisa exclamando: “si quieren matarme, mátenme”. La apelación a un estilo político prepotente de señas claramente populistas no fue casual aquel 30 de septiembre. De hecho, Rafael Correa recurre constantemente a formas violentas en el conflicto con otros sectores, como los indígenas o estudiantes. Varios analistas han hecho comparaciones entre este estilo y formas de gestionar la política, similares a las de un patrón de hacienda.

mientos se daba de otra manera —por ejemplo, iniciándose primero las paralizaciones de servicios por parte de los trabajadores públicos y luego sumándose a ellas la fuerza pública—, otro hubiera sido el desenlace político. Sobre todo si se considera la ausencia de apoyo de sectores sociales organizados y la carencia de una estructura dentro de Alianza País.

De manera contraria a lo que piensa la cúpula de gobierno, durante los últimos años la construcción de legitimidad política en el Ecuador ha estado mucho más cercana a las movilizaciones populares que a las instituciones democráticas. Si bien el gobierno apela constantemente a recursos plebiscitarios, no ha realizado una lectura correcta sobre los sujetos políticos e históricos involucrados en los procesos recientes. Para el régimen, el sujeto encarnado de su proyecto es el *ciudadano* universal de la modernidad liberal, que en su totalización abstracta termina mostrándose como un concepto vacío.

El gobierno se enuncia a sí mismo desde este lugar vacío —es decir, vacante—, lo cual facilita la coexistencia interna de sentidos contradictorios. Ello permite que su proyecto aparezca políticamente como radical y socialista, e impulse a la vez medidas a todas luces favorables con los sectores que anteriormente promovían un modelo neoliberal. La notoria ausencia de un liderazgo político de los sectores duros de las élites<sup>10</sup> durante los sucesos del 30 de septiembre, otrora cruciales en escenarios similares de crisis, muestra la conformidad de los mismos con la orientación del gobierno.

El descontento existente entre varios sectores de la izquierda y los movimientos sociales incidió en la elaboración de lecturas apresuradas que condujeron a un posicionamiento erróneo ante la situación, llegando algunos de los mismos a apoyar, inclusive, la remoción del jefe de Estado y la conformación de un nuevo gobierno. Sin embargo, a pesar de la complejidad que enfrentaban las organizaciones del campo popular, el movimiento indígena a través de la Conaie y su principal organización, la Ecuarrunari, plantearon una posición responsable de respaldo a la Constitución y rechazo a la posibilidad de una dictadura así como de crítica al gobierno.

Una vez conjuradas las condiciones para un golpe de Estado y asegurada la integridad del presidente, el gobierno transformó hábilmente la crisis en réditos políticos. En cierta forma, los acontecimientos del 30 de septiembre tuvieron la misma función de renovación del consenso social que un proceso electoral/plebiscitario, que el gobierno hubiera enfrentado con relativas ventajas. Horas antes de la insubordinación policial, la decisión de acudir a una muerte cruzada era un hecho. Sin embargo, pocos días después y a razón del rechazo de la población a la violencia



generada por la actuación de la policía y consecuente incremento en la popularidad del presidente, dicha posibilidad fue descartada.

Entre los sectores que quedaron mejor posicionados luego del escenario de crisis, se encuentran tanto las FF.AA. como los sectores menos progresistas del gobierno. Cuatro días después de los acontecimientos, el gobierno decretó incrementos salariales —inclusive retroactivos— para los oficiales tanto de las FF.AA. como de la Policía. Es un secreto a voces que el gobierno fue obligado a negociar el apoyo político de los altos mandos, sobre todo de las FF.AA., luego del chantaje solapado que expresara el Comando Conjunto durante el día de la insubordinación. Los contenidos precisos de los acuerdos con las FF.AA. son desconocidos, pero se habla ya de un gobierno frágil bajo el tutelaje de los militares. De ser así, quedará claro que el gobierno ha preferido construir su proyecto sin el apoyo de organizaciones populares.

En el escenario actual se inicia un nuevo ciclo político en el que el gobierno cuenta con remozadas condiciones políticas para proseguir el trámite de leyes y reformas urgentes, cuya orientación aparece cada vez menos progresista y distante de los postulados originales del proyecto de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, no se descartan escenarios de nueva e inclusive mayor conflictividad política y social. Existe además profundo malestar en las filas policiales que podría desbordarse. La probada participación de varios cuadros del Partido Sociedad Patriótica en los acontecimientos del 30 de septiembre, lleva a considerar la posibilidad de que la insubordinación de varias ramas de la fuerza pública fue acaso una manera de medir la fuerza del gobierno y que se encuentra en marcha un proceso de desestabilización mucho más complejo. Sea como fuere, la crisis política en el Ecuador está lejos de haber concluido.

<sup>10</sup>Gremios empresariales, cámaras de comercio, sectores agroexportadores, industria hidrocarburífera, etcétera.

## El sujeto indígena en el Estado moderno

El XI encuentro de la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena de la Compañía de Jesús en América Latina sirvió de excusa para compilar algunos datos sobre la situación de los pueblos originarios en la región. Aunque en realidad se trata de un tema con sumas complejidades debido a las grandes asimetrías entre los pueblos indígenas y sus relaciones con cada uno de los estados donde hacen vida, no deja de ser importante incorporarlo en un informe de coyuntura. En este caso, además de constituir una de las opciones de la Compañía de Jesús en América Latina desde sus inicios, en la actualidad gana mayor fuerza el acompañamiento a los pueblos indígenas debido al mensaje de

---

**En 1984 se hizo la primera reunión de un colectivo que quería compartir experiencias indígenas. En ese momento eran iniciativas muy diferentes, con cosas en común pero diversidad de abordajes.**

preservación integral de la tierra, la diversidad cultural y la riqueza ambiental en nuestros países que ellos contienen en su espíritu.

En 1984 se hizo la primera reunión de un colectivo que quería compartir experiencias indígenas. En ese momento eran iniciativas muy diferentes, con cosas en común pero diversidad de abordajes. En realidad, la presencia de representantes de distintas etnias, además de sacerdotes y religiosas, se dio años después.

En 1991 se hizo la reunión en el contexto de la cercanía de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los conquistadores al continente. Para Jerónimo Hernández s.j., relator del recorrido histórico de la Red, en ese momento se objetaba que se

quisiera ver la fecha como una *celebración*, pero eso significó, a su vez, un despertar de la memoria indígena. En ese momento surgieron las dudas sobre el papel de la Compañía de Jesús; según Hernández: “¿Debíamos acompañarlos en su desaparición o en su renacer? ¿Los pueblos indígenas serán capaces de afrontar los



Fotos Luis Carlos Díaz, bajo licencia Creative Commons.

retos de los estados neoliberales?”. Eran otros tiempos y otro panorama político y económico en la región.

En algún punto de los años noventa, la experiencia del encuentro dio mayor cabida a la noción del reconocimiento a la espiritualidad honda que los pueblos indígenas mostraban a través de sus propias expresiones.

En 2005, por ejemplo, cuando la reunión se realizó en Bolivia, la discusión tuvo que ver con la participación política de los indígenas dentro de sus contextos sociales. Obviamente había diferentes posturas, que hoy se mantienen en dos sentidos: o las comunidades no quieren nada con un Estado que consideran *occidental*, impositivo y desconecedor de la diversidad; o más bien toman los mismos instrumentos de ese Estado para cambiarlo. Ese año, Evo Morales, de ascendencia aymara, ya estaba lanzado como candidato a la presidencia de Bolivia, donde ganó las elecciones gracias al consenso y las fuerzas de sindicatos, movimientos sociales y pueblos indígenas.

Actualmente Bolivia vive un proceso de reconstrucción de un Estado plurinacional con 36 identidades indígenas reconocidas, y una mayor ocupación de puestos de poder por parte de indígenas. Claro que entre los retos de ese renacer se encuentra la disparidad entre pueblos indígenas andinos y los de tierras bajas, así como también la tensión constante entre el centralismo frente a las autonomías regionales y los controles económicos en un país tan pobre.

El encuentro de 2010 se dio en la sede de la Universidad Indígena de Venezuela, a 800 km de Caracas. Allí se dieron cita unos 40 invitados internacionales de distintas latitudes de América Latina, desde México hasta el Cono Sur, y el encuentro pudo reunir a más de 100 personas que incluyeron a los jóvenes estudiantes de la universidad, líderes de pueblos indígenas, sacerdotes, religiosas y laicos aliados con el trabajo de acompañamiento a pueblos originarios.

## Los peligros que rodean la choza

Las amenazas que rodean la sustentabilidad de los pueblos indígenas en el continente pasan, en la mayoría de las ocasiones, por proyectos políticos y económicos que pretenden despojarlos de sus espacios, tanto los tradicionales como los espacios en donde están reducidos. La pérdida de tierras, mantos acuíferos, recursos animales y vegetales, la presencia de minerales y otras riquezas en sus predios, terminan amenazando su cultura y su identidad.

Asimismo, hay otra serie de acciones que van minando la territorialidad indígena, básica para su preservación. A lo largo del continente se registran acciones como leyes y reformas legislativas que afectan el derecho sobre las tierras y los recursos; hay además una creciente militarización en zonas indígenas, por control territorial y fronterizo o por la protección de riquezas naturales, que afecta las relaciones y los flujos de esos pueblos; otro elemento es la introducción del dinero y el intercambio económico, de manera acelerada, que en ocasiones pervierte las relaciones de los asentamientos en su relación con el entorno. Por

otro lado se suma el acaparamiento de tierras por manos privadas o estatales para su monocultivo o explotación intensiva, la producción de biocombustibles, la generación y transmisión de hidroelectricidad, el ecoturismo, las migraciones forzadas y el descontrol sobre minerías ilegales y narcotráfico. Todo esto configura un mapa de riesgos muy difíciles de superar por los pueblos indígenas y los estados.

## Chile: de los mapuches resistentes

Durante más de 90 días, un grupo de 34 indígenas mapuches realizaron una huelga de hambre dentro de distintas cárceles chilenas. Los mapuches decidieron radicalizar su protesta en vista de que el Estado no quiso cambiar algunas consideraciones en sus causas penales y les aplicaba una ley *antiterrorismo* que los ponía a la orden de la justicia militar por acciones que constituían simples resistencias al desalojo de tierras y el incumplimiento de derechos constitucionales. El movimiento mapuche, aunque es bastante disperso, se viene articulando desde estos episodios de protesta. Las mediciones indican que siete de cada diez mapuches ya viven en ciudades, donde además sus protestas sufren de una discriminación racial manifiesta, pues cuando se trata de mineros o sindicatos, la represión del Estado ha sido distinta.

En Chile, el desplazamiento forzoso de indígenas ocurre por minería y mayormente por el avance de la industria forestal. Con ambas actividades, el país apuesta por el desarrollo de su economía y se aprovecha de lo atomizada de la movilización mapuche para no repararlos con otras tierras. Diversos movimientos de solidaridad se han movido en la región, e incluso han perseguido al presidente Sebastián Piñera en sus giras internacionales, pero dentro de Chile la situación es más difícil para una etnia cuyos 600 mil miembros buscan articularse y, a pesar de sus episodios de resistencia, van perdiendo su lenguaje y su cultura: según el Centro de Estudios Públicos, actualmente

---

**Actualmente Bolivia vive un proceso de reconstrucción de un Estado plurinacional con 36 identidades indígenas reconocidas, y una mayor ocupación de puestos de poder por parte de indígenas.**

---

sólo 15% de los mapuches, en las ciudades, hablan en su lengua originaria con sus hijos.

## Brasil: el gigante disperso

Brasil cuenta con la inmensa Amazonía y una gran diversidad de pueblos indígenas, algunos de ellos incluso aislados o autónomos del Estado, en su propia calificación. Desde 1990 hay una gran extensión de tierras invadidas en el oeste del Paraná. Allí, pueblos como el guaraní perdieron sus asentamientos y su posibilidad de sobrevivir porque los espacios de confinamiento no permiten su desarrollo y promueven la migración. En los últimos años se han asumido distintas políticas favorables a la agroexplotación, aprovechando el empujón productivo que pone a Brasil entre las primeras economías del mundo, pero dejando de lado a los colectivos más desfavorecidos. Por otra parte, la presencia de hacendados armados que actúan en la impunidad, ha permitido que se registren episodios de violencia e incluso asesinatos cuando los indígenas intentan retomar espacios. Actualmente se acaba de crear una Secretaría Nacional de Salud Indígena para atender algunas poblaciones originarias que seguían excluidas del sistema.

## Paraguay: cambió el gobierno pero nada más

Hay otros ejemplos como el Paraguay, país donde el idioma guaraní es oficial junto al castellano, pero en el que sólo 1,6% de su población es indígena. Paraguay vive un tiempo de cambio político, pues la caída del Partido Colorado, después de décadas de hegemonía, cambió las relaciones de poder. Igualmente la coyuntura de que el presidente Fernando Lugo no cuente con una mayoría legislativa hace que no haya mayores cambios en una economía agrícola que permite la siembra de transgénicos y estimula el monocultivo intensivo de soja y maíz.

## México: los tarahumaras en pobreza crítica

El más reciente informe del PNUD (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo) da cuenta de las graves dificultades que viven los indígenas mexicanos –12 millones, 10% de la población nacional–, especialmente los asentamientos tarahumaras (rarámuri) en la parte alta de la Sierra Tarahumara en el estado norteño de Chihuahua. Los tarahumaras conforman una población de 50 mil habitantes y sus índices de pobreza levantan la señal de alarma del PNUD. Según sus cifras, viven una mayor



Fotos Luis Carlos Diaz, bajo licencia Creative Commons.

desigualdad social respecto al resto de los mexicanos: 50% de sus niños padece desnutrición y sólo uno de cada diez rarámuri tiene acceso a algún servicio básico del Estado como agua, salud o educación. Los informes aclaran que no sólo se trata del despojo de sus tierras, sino del desamparo del Gobierno nacional, cuyo presupuesto destinado a la materia no llega a los más desfavorecidos y esto se traduce en que el ingreso de los tarahumaras llega a ser 17 veces menor que el de los capitalinos.

Asimismo, los desbalances en el sistema de justicia, que termina penalizando a los más pobres y no proporciona intérpretes de lenguas indígenas, ha llevado a la cárcel a centenares de representantes de muchos de los 62 grupos etnolingüísticos que perviven en México. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país informó que en 2010 han liberado a 363 indígenas en todo el territorio.

## Perú: el humo de Bagua no se esfuma

Perú vive algunas dificultades en el mundo indígena. Su población aborígen ronda los 4 millones de personas, tres cuartas partes de ella son quechua, el resto son aymaras y otras decenas pequeñas comunidades lingüísticas. Unos 250 mil indígenas habitan la zona amazónica del Perú, y allí fue donde se dieron los episodios de resistencia y recuperación de la tierra en un sector llamado Bagua. A partir de 2008 la zona ha vivido enfrentamientos entre poblados indígenas awajún (aguarunas) y fuerzas del Estado; el más grave de ellos el 4 de junio de 2009, cuando se reportaron 33 muertos y varios desaparecidos, en un conflicto que luego incluyó también a los jesuitas del sector, cuando el Gobierno los responsabilizó de haber manipulado a los indígenas para actuar en contra de las fuerzas de seguridad. Detrás del desplazamiento territorial está la búsqueda de minería y petróleo en esas tierras, mientras que el movimiento indígena se ha ido resquebrajando por su constante criminalización y por una cantidad de dádivas otorgadas por el Gobierno, como motos y

otros regalos, a algunos líderes de las 52 comunidades participantes del conflicto.

### Ecuador: avances con desconfianza

Ecuador, por su parte, tiene más de 45 pueblos indígenas, algunos de ellos en aislamiento voluntario, y que actualmente viven unas movilizaciones por los recursos naturales, que resultan interesantes de seguir. Actualmente el país tiene un sistema de distribución de agua dulce que suministra 80% del servicio a sólo 20% de la población total. Las leyes dicen que el agua no puede ser privatizada, pero los pueblos indígenas le temen a que haya una peor distribución del recurso y por eso se han mostrado cautelosos ante nuevas legislaciones. Asimismo hay problemas de comunicación y educación sobre los efectos ambientales que generan las minas y la explotación de hidrocarburos. Aunque las nuevas legislaciones garanticen la conservación del ambiente, esto pocas veces se cumple, en perjuicio de las comunidades que colidan con zonas de explotación intensiva. Un cambio importante que se está impulsando en Ecuador es que el reconocimiento a los pueblos indígenas aumente en el sentido de que no sean meros actores para consultar sobre la explotación de sus tierras, sino que además tengan el suficiente poder para autorizar o no esas obras.

### Venezuela: derechos de papel

Venezuela ha avanzado en materia indígena con legislaciones y otros cambios nominales, pero no con prácticas reales. En Venezuela conviven unas 30 agrupaciones indígenas dispersas y alejadas de las grandes ciudades, salvo en el nor-occidente, cuyo reconocimiento y protección está avalado por la Constitución aprobada en 1999 y una ley de protección a pueblos y comunidades indígenas. Asimismo cuenta con un ministerio para asuntos indígenas, representantes en el parlamento nacional y algunos otros entes del Estado encargados de su atención. Sin embargo, con toda esta arquitectura legal existen deudas acumuladas con los pueblos originarios. La Constitución preveía que para 2001 debían estar delimitadas las tierras indígenas, y hasta los momentos no se ha demarcado oficialmente una sola ni se le ha otorgado el derecho de propiedad colectiva a las comunidades pisatarias. Asimismo, hay varios indígenas que se encuentran encarcelados y, aunque también lo contemplan las leyes, tampoco se ha cumplido el mandato de permitirles ser juzgados por sus propios pueblos.

Por un lado el Gobierno, a juicio del hermano jesuita José Korta, provee una política incluyente, pero que puede significar un



Fotos Luis Carlos Díaz, bajo licencia Creative Commons.

retroceso si la participación en ella significa defender al Gobierno, porque eso no se corresponde con la identidad indígena. A su juicio "Chávez apoya tanto al movimiento indígena que lo puede sofocar", y no se refiere tanto a la afectividad sino al otorgamiento desordenado de recursos económicos que terminan generando conflictos en las comunidades indígenas y convirtiéndolas en clientas o pedigrúneas del Estado.

Por otra parte hay iniciativas independientes, como la Universidad Indígena de Venezuela, que en estos momentos es un lugar de confluencia de 60 jóvenes de nueve pueblos indígenas distintos, que buscan fortalecer su identidad, sistematizar el conocimiento ancestral de su etnia, y convertirse en los líderes de la próxima generación en cada una de sus comunidades. Fue la UIV, en el caño del río Tauca, la que sirvió de centro para la reunión de la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena de América Latina.

**Nota:** al cierre de este informe de coyuntura, el hermano jesuita José María Korta junto a Ramón Sanare, un ayudante de la UIV, realizaron durante 7 días una huelga de hambre en Caracas exigiendo la libertad del cacique Sabino Romero y dos indígenas más, y el inicio de las demarcaciones de territorios indígenas. La huelga fue levantada bajo el compromiso del Estado de atender ambas problemáticas.

## Elecciones brasileñas ¿Continuidad del lulismo?'

Por quinta vez consecutiva el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) disputarán la presidencia de la República. En dos de ellas (1994 y 1998), el PSDB obtuvo la jefatura del gobierno; en las dos siguientes (2002 y 2006), ganó el PT.

Sorprendentemente en estas elecciones presidenciales, los partidos no han presentado sus programas (proyectos) para el país. Marco Aurelio García, coordinador de programa de Dilma Rousseff (PT), afirmó que todavía no deciden si el programa será o no divulgado. El PSDB de José Serra, por su parte, no divulgó cuándo presentará un documento final con sus propuestas.

Los programas se volvieron secundarios, tampoco han sido reivindicados por la sociedad y ni siquiera por las fuerzas políticas que poseen tradición en el debate político, como son los movimientos sociales. En las elecciones de 1989, 1994 y 1998 los programas ocupaban un lugar destacado. En las elecciones de la década de los 90 e inicios de 2000, disputadas entre el PT y el

PSDB, eran comunes y acalorados los debates entre el denominado proyecto de Inserción competitiva de la economía internacional (PSDB) y el proyecto Nacional popular (PT).

El debate en torno a los programas fue sustituido por el lulismo. Ahora, la disputa que se hace es para ver quién reúne mejores atributos para continuar el lulismo. Señálese que hasta Serra desea dar continuidad al legado de Lula. Los profesionales del *marketing* político del PSDB intentaron *colar* la imagen de Serra a la de Lula en la propaganda electoral, lo que fue rechazado por el PT. En esa disputa por la herencia del lulismo, la enorme ventaja es, evidentemente, de Dilma Rousseff (PT) por ser la candidata del propio Lula.

### Lulismo: ¿un proyecto político para el Brasil?

El gran nombre de las elecciones brasileñas se llama Luiz Inácio Lula da Silva. Todos procuran su apoyo, hasta los mismos políticos de la oposición. Impresiona a todos los analistas políticos los altos índices de popularidad de Lula. Los índices de aprobación óptimo/bueno de su gobierno bordean 80% en todos los segmentos sociales, económicos y geográficos del país. El desempeño arrebatador de Lula es lo que explica el crecimiento acelerado de la candidatura de Dilma Rousseff. Nadie duda que Lula está consiguiendo algo difícil en el mundo de la política: la transferencia de votos.

¿El lulismo puede ser definido como un proyecto político para el país?, ¿cuál es el contenido del lulismo?, ¿cómo explicar el fenómeno lulismo?, ¿por qué la oposición de izquierda y de derecha a Lula se encuentra desorientada?, ¿cuál será la duración de ese ciclo?, ¿Dilma Rousseff, eventualmente electa, sustentará la continuidad del lulismo sin Lula?, ¿por qué los movimientos sociales se decidieron de forma apresurada por el apoyo a Dilma? Esas, entre otras cuestiones, son suscitadas por las elecciones 2010.



En esencia, el lulismo se caracteriza por el fuerte vínculo de los pobres con la figura de Lula. En un ensayo titulado *Raíces sociales e ideológicas del lulismo*, el científico político André Singer busca caracterizar ese fenómeno. Según este análisis, son los más pobres, aquellos que no consiguieron construir desde abajo sus propias formas de organización porque estaban atomizados dentro del sistema productivo, los que están en la base del fenómeno denominado lulismo. Según André Singer, los más pobres no votaron por Lula en 1989, 1994, 1998, y 2002. No votaron, sobretudo, porque tenían miedo; sin embargo, en 2006 votaron en masa por Lula. En ese sentido, dice Singer, el punto de inflexión del surgimiento del lulismo se manifiesta con fuerza en las elecciones de 2006.

En 2006, afirma el autor: "Hubo un desplazamiento subterráneo de electores no de baja renta, sino de bajísima renta, el cual pasó desapercibido." Los más pobres, contrariamente a lo que hicieron en las elecciones anteriores, sufragaron por Lula mayoritariamente. En las elecciones de 2006, Lula coronó un proceso iniciado en su primer mandato que sellará su profunda identificación con los más pobres. Identificación que "pudo haber arraigado raíces duraderas en el subproletariado brasileño."

Los pobres, atomizados por su inserción en el sistema productivo, necesitaban de alguien que pudiese, desde lo alto, recibir la proyección de sus aspiraciones. Y aquí surge el lulismo:

...un rayo en el cielo azul, una vez que surge de la cima hacia abajo, sin aviso previo, sin la movilización lenta (y ruidosa) que caracteriza la autoorganización autónoma de las clases subalternas cuando ella se da en los moldes típicos del siglo XIX, esto y, de los partidos y movimientos de clase,...

El lulismo significó un importante realineamiento político de estratos decisivos del electorado. Ese realineamiento reside en el hecho de que los más pobres pasaron a votar por Lula. En la interpretación de Singer los electores más pobres siempre buscaron una reducción de la desigualdad, de la cual tenían conciencia, por medio de una intervención directa del Estado, evitando movimientos sociales que pudiesen desestabilizar el orden.

Ha sido ese *conservadurismo popular* el que derrotó a Lula en 1989, 1994 y 1998. En ese sentido, continúa Singer:

...las derrotas de Lula en 1994 y 1998 pueden ser entendidas como reediciones de 1989, a pesar de la estabilidad monetaria haberse sobrepuesto, en 1994, a los argumentos abiertamente ideológicos utilizados por Fernando Collor (amenaza comunista) en 1989. Tal como en 1989, las dos campañas de Fernando Henrique Cardoso movilizaron a los electores de menos recursos contra la izquierda.

El mejor resultado de Lula, en 1994, ocurrió entre los estudiantes, asalariados registrados con escolaridad secundaria o superior y entre los funcionarios públicos. Ya los trabajadores sin registro formal, desvinculados de la organización sindical, dieron los mejores resultados a Fernando Henrique. En 1998, la coalición vencedora procuró convencer, con éxito, a los electores más pobres, que Cardoso sería el mejor conductor del país en medio de la crisis financiera internacional que amenazaba la estabilidad conquistada cuatro años antes, destaca Singer reproduciendo estudios analíticos sobre las elecciones.

Poco después de asumir el gobierno, Lula obtiene la adhesión del segmento de la clase social que buscaba desde, por lo menos, 1989. Entre la elección de 2002, recordada como la *demorada* ascensión de la izquierda en un país de tradición conservadora, y la reelección de Lula por *otra base social e ideológica*, en octubre de 2006, se operó una transformación que se hace necesario entender, afirma Singer.

¿Cómo y por qué los pobres pasaron a identificarse y a votar por Lula? Tres años después de la posesión (presidencial), el primero de enero de 2003, cuando otra contienda electoral (2006) ya apuntaba en el horizonte, es que comienza a manifestarse el lulismo y éste se asienta en la sensación de electores de renta baja y media de que su poder de consumo aumentara, sea en productos tradicionales (alimentos, material de construcción), sea en nuevos (celulares, DVD, pasajes aéreos). Esa *sensación*, analiza Singer, no cabría en el comienzo del mandato, marcado por una política recesiva. No obstante:

...a partir del final de 2003, con el lanzamiento del Programa Bolsa Familia (PBF), se inicia una gradual mejora en la condición de vida de los más pobres (...) entre 2003 y 2006, la Bolsa Familia vio su presupuesto multiplicado por trece, saltando de R\$ 570 millones de reales a 7.5 billones de reales, atendiendo cerca de 11.4 millones de familias cerca de las elecciones de 2006.

Diversos estudios, alerta André Singer, encontraron indicios de que la Bolsa Familia tuvo influencia en los votos recibidos por Lula en 2006. Suena consistente, dice él, la afirmación de que el programa cumplió un papel en la victoria de Lula. Sin embargo, la Bolsa Familia por sí sola no explica las bases del realineamiento electoral —transferencia masiva del voto de los más pobres a Lula en 2006.

Otros factores convergieron; entre ellos, citando varios estudios, destaca Singer: a) el *control de precios*, como un componente central del aumento del poder de compra entre los estratos pobres; b) el *aumento real del salario mínimo* de 24,25% en el primer mandato de Lula, que sumado a la Bolsa Familia y a

---

**Poco después de asumir el gobierno, Lula obtiene la adhesión del segmento de la clase social que buscaba desde, por lo menos, 1989.**

---



la elevación del salario mínimo que apalancó las ganancias de los jubilados y dinamizó las economías locales menos desarrolladas; c) el uso del *crédito consignado*; éste fue parte de una serie de iniciativas oficiales que tenía por objetivo expandir el financiamiento popular. Incluyó un aumento expansivo del préstamo a la agricultura familiar, del microcrédito y de la bancarización de personas de bajísima renta; d) la promulgación del Estatuto de Vejez, en enero de 2004, amplió la edad mínima —cayó de 67 a 65 años— para recibir el *Beneficio de Prestación Continuada* (BPC), que paga un salario mínimo a personas de la tercera edad y los portadores de necesidades especiales —2,4 millones de ciudadanos recibían el BPC en 2006—; e) además de esas medidas de alcance general que propiciaron la activación de sectores antes inexistentes en la economía —por ejemplo, clínicas dentarias para las personas de bajos recursos—, una serie de programas focalizados como Luz para todos (electrificación rural), regularización de las propiedades de los quilombos<sup>2</sup>, construcción de cisternas en las zonas semi-áridas etcétera, favorecieron al sector de bajísimos recursos.

Lula fue también, destaca Singer:

...el primer presidente que vivió la experiencia de la miseria, lo que no es irrelevante, dada la sensibilidad que demostró, una vez en la presidencia, para la realidad de los miserables.

Las conclusiones del autor apuntan a la esencia del lulismo: la representación del subproletariado sin la necesidad de rupturas. "Árbitro por encima de las clases, el lulismo no precisa afirmar que el pueblo alcanzó el poder o que 'los dominados dirigen la política'". La tesis de árbitro por encima de las clases de Singer también es sustentada por el sociólogo Werneck Vianna. Según él:

**La victoria de Dilma se presenta como continuidad del lulismo y su proyecto pluriclasista anclado en el Estado como mediador y proveedor del pacto por lo alto.**

Lula (...) es un gobierno que absorbe las representaciones corporativas de los trabajadores y empresarios, como un jefe de Ejecutivo carismático que media intereses en conflicto, fortalecido por la creciente centralización del Estado.

La aguda interpretación de Luiz Werneck Vianna es que el gobierno de Lula se tragó a todos. El movimiento social grita, reacciona, mas, en el límite, no rompe con el gobierno; la derecha patelea, protesta, pero se rinde al gobierno de coalición; el capital productivo y financiero reclama, pero está contento con Lula. La máxima del Presidente, según Werneck, dice: "que los desacuerdos internos maduren y al final el árbitro decide..."

En la perspectiva de la tesis de realineamiento del electorado brasileño, caracterizado por la adhesión de las clases bajas al lulismo (por ver en Lula la posibilidad de ascensión social sin confrontación), la candidatura de Dilma Rousseff representa el arco que el lulismo construyó. Por tanto, la victoria de Dilma, en caso de ser confirmada, se presenta como continuidad del lulismo y su proyecto pluriclasista anclado en el Estado como mediador y proveedor del pacto por lo alto. Esto ya está claro.

Tampoco una eventual victoria de la oposición cambiaría substancialmente el rumbo. Cambio de semblante, en caso de que venzan los tucanos (símbolo del PSDB), vendría a suceder en las relaciones con el movimiento social. El PSDB tiene un histórico de difícil relación con el movimiento social (sindicatos, MST<sup>3</sup>, movimientos populares), basta tener presente los mandatos de Fernando Henrique Cardoso en la presidencia y el mandato de José Serra como gobernador en Sao Paulo. El PSDB sería más duro e inflexible en las cuestiones relativas al tratamiento con el movimiento social, razón por la cual las relaciones serían tensas. Las probabilidades de que manifestaciones sociales sean tratadas con represión aumentan en un gobierno tucano. También la

<sup>2</sup> Enclaves de afrodescendientes brasileños. Nota del traductor.  
<sup>3</sup> El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. N.T.

política exterior podría sufrir cambios. El candidato del PSDB ha hecho comentarios que desautorizan las relaciones políticas y económicas construidas por el gobierno de Lula.

## Posición del movimiento social

El movimiento social mayoritario —se piensa aquí, sobre todo en las centrales sindicales y en el MST, seguido por otros movimientos— ya manifestaron una posición en estas elecciones: el apoyo a la candidatura de Dilma Rouseff. El periódico Brasil de Fato<sup>4</sup>, una especie de portavoz de una parcela importante del movimiento social, en su editorial de agosto manifiesta:

...los movimientos sociales en general, y en particular la Vía Campesina, que sustentan la propuesta del diario Brasil de Fato, han adoptado una postura política de evitar adhesiones explícitas a candidaturas. Mas todos ellos manifestaron públicamente la decisión política de no medir esfuerzos para derrotar la candidatura de Serra. La victoria del tucano sería la vuelta del neoliberalismo y del desprecio a los movimientos sociales.

El diario deja implícito el apoyo a la candidatura de Dilma:

...la candidatura de Dilma representa la continuidad del gobierno de Lula y tiene fuerzas sociales entre la burguesía más lúcida (temerosa de la reacción de las masas), sectores de clase media que mejoraron de vida y amplios sectores de la clase trabajadora. Prácticamente todas las fuerzas populares organizadas tienen su base social apoyando la candidata petista.

Sobre las otras candidaturas en el espectro de la izquierda, dice:

...la candidatura de Marina Silva (PV),<sup>5</sup> a pesar de sus vínculos pasados con el PT y el gobierno de Lula, no consiguió sensibilizar a la clase trabajadora y reúne apenas fuerzas sociales representadas por sectores ambientalistas de la clase media urbana de los grandes centros. Y por eso su potencial electoral es muy pequeño. Y, por fin, tenemos tres candidaturas de partidos de izquierda —Plinio Arruda Sampaio (PSOL)<sup>6</sup>, José María (PSTU)<sup>7</sup>, Ivan Pinheiro (PCdoB)<sup>8</sup>— con tres luchadores del pueblo, de compromiso histórico con la clase trabajadora. Pero ninguno de ellos consiguió aglutinar fuerza social organizada. Y eso impide progresos electorales.



### La candidatura de Marina Silva (PV), a pesar de sus vínculos pasados con el PT y el gobierno de Lula, no consiguió sensibilizar a la clase trabajadora

El posicionamiento de esa parte importante del movimiento social fue considerado precipitado por muchos. La percepción que queda es que el movimiento social mismo, con todas las críticas e insatisfacciones que tienen del gobierno de Lula, optó por Dilma Rouseff porque considera que tienen más que perder con una eventual no elección de la candidata del PT. El posicionamiento de los movimientos sociales frente a las elecciones de 2010 tiene mucho que ver con el pragmatismo y poco con la utopía que otrora le alimentó. Puede no ser muy bueno con Dilma, pero puede ser mucho peor sin ella; tal vez de esa forma pueda ser definido el insight que anima al movimiento social en su decisión de apoyo a la exministra de la Casa Civil. Con esto se quiere decir que al menos con Dilma en el Palacio de Planalto se garantiza la posibilidad de interlocución y avances en la pauta social, cosa que está lejos de ser conseguida con la candidatura del PSDB.

Se registra, sin embargo, que de la declaración de apoyo a la campaña de calle hay una gran distancia. La opción por el apoyo es más medio que fin. El hecho incontestado es que el imaginario de transformación social que congregó a los principales movimientos sociales y las principales luchas en los años 80 se debilitó. La convicción de que la realidad puede ser transformada perdió su fuerza, y el encantamiento con la política ya no existe más. Los movimientos sociales viven una profunda crisis y están lejos de ejercer el protagonismo de los años 1980 y 1990.

<sup>4</sup> Brasil de hecho. N.T.

<sup>5</sup> Partido Verde. Nota del traductor.

<sup>6</sup> Siglas del Partido Socialismo y Libertad. Nota del traductor.

<sup>7</sup> Siglas del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado. Nota del traductor.

<sup>8</sup> Sigla del Partido Comunista brasileño. Nota del traductor.